



Informe 0607/2008

La consulta plantea si la cesión de datos de los clientes de Unión Fenosa sin su consentimiento, al Instituto Gallego de la Vivienda y Suelo consultante, dependiente de la Consellería del Gobierno Gallego competente en materia de vivienda, fundamentada en el artículo 54.1.h) de la Ley 4/2003, de 29 de julio, de vivienda de Galicia, es conforme con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal.

I

Con carácter general, debe indicarse que la comunicación de datos solicitada a la empresa Fenosa constituye, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 i) de la citada Ley Orgánica, una cesión de datos de carácter personal, definida como “Toda revelación de datos efectuada a persona distinta del interesado”.

Tal y como determina el artículo 11.1 de la Ley Orgánica 15/1999, “los datos de carácter personal objeto del tratamiento sólo podrán ser comunicados a un tercero para el cumplimiento de fines directamente relacionados con las funciones legítimas del cedente y del cesionario con el previo consentimiento del interesado”. Esta regla de consentimiento sólo se verá exceptuada en los supuestos contemplados en el artículo 11.2, entre los que cabe destacar aquellos casos en que una norma con rango de Ley dé cobertura a la cesión. Por ello, deberá determinarse si la legislación que se hace constar en la consulta permite esa transmisión de datos.

El artículo 49 de la Ley 4/2003 mencionado por la consultante establece en su número 1 que “Serán sancionados por los hechos constitutivos de las infracciones administrativas a que se refieren los artículos 52, 53 y 54 de la presente Ley las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos, aún a título de simple inobservancia.” El artículo 54.1. h) contempla como infracción de carácter muy grave “No destinar a domicilio habitual y permanente o mantener deshabitadas sin causa justificada durante un plazo superior a tres meses las viviendas de protección oficial, así como aquéllas para las que se hubiera obtenido financiación pública (...).” Así mismo su artículo 59. 1 atribuye la competencia para la imposición de sanciones a los delegados provinciales de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Vivienda. Y su número 3 señala que “En defecto de procedimiento específico, la imposición de sanciones estará a lo dispuesto en el procedimiento sancionador general.” Especificando su número 4. que “Las funciones inspectoras con el fin de averiguar e investigar el exacto cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley corresponden al Instituto Gallego

de la Vivienda y Suelo. Los inspectores de este organismo desarrollarán las tareas de inspección necesarias al respecto, teniendo la consideración de agentes de la autoridad, gozando las actas que levanten de la presunción de veracidad.

A su vez, el artículo 53. 1. establece que “Tendrán la calificación de infracciones graves: ñ) La obstrucción o la negativa a suministrar datos o facilitar las funciones de información, vigilancia o inspección que practique la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia.”

No obstante lo anterior, es preciso recordar el denominado principio de finalidad y proporcionalidad en el tratamiento de datos personales, recogido en el artículo 4.1 de la Ley Orgánica 15/1999, a cuyo tenor “Los datos de carácter personal sólo se podrán recoger para su tratamiento, así como someterlos a dicho tratamiento, cuando sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el ámbito y las finalidades determinadas, explícitas y legítimas para las que se hayan obtenido”. De ello se desprende la necesidad de que el tratamiento de un determinado dato de carácter personal, deberá ser proporcionado a la finalidad que lo motiva.

La simple remisión al artículo 54.1.h) de la Ley 4/2003 de la Vivienda de Galicia, impide fundamentar la cesión de los datos de los clientes de Fenosa sin su consentimiento, dado que el articulado de dicha norma no prevé que se efectúen cesiones para controlar las viviendas de protección oficial, si no que regula una infracción, pero sigue sin prever, la cesión al Instituto Galego de Vivienda o Solo de los datos para comprobar la concurrencia o no de las infracciones.

Si por el contrario la consultante justifica que a través de una norma autonómica con rango de Ley, tiene atribuidas las competencias de control, será posible la cesión de los datos solicitados sin el consentimiento de los interesados.

En conclusión, si bien el artículo 54.1.h) invocado por la consultante en el requerimiento de datos de los clientes de Fenosa, no contempla específicamente la cesión de estos datos, sí podemos entender que la atribución de competencias de control que contiene el artículo 59. 1 y 4 de la misma norma autonómica con rango de Ley, habilita esta cesión basada en el ejercicio de funciones de vigilancia y control de los contenidos de dicha norma, para lo cual inviste de la condición de autoridad pública a los inspectores de la materia, contemplando como infracción sancionable la obstrucción o negativa a suministrar datos o facilitar las funciones de información, vigilancia o inspección que practique la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Cabe por último recordar lo dispuesto en el artículo 4.2 de la Ley 15/1999 en torno a los principios de la protección de datos, cuando señala que



“Los datos de carácter personal objeto de tratamiento no podrán usarse para finalidades incompatibles con aquellas para las que los datos hubieran sido recogidos.”

Todo ello en aplicación de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal,